

CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN MÉXICO

DARCY TETREAUULT*

La conflictividad socioambiental, particularmente en México, representa un frente cada vez más importante en las luchas de resistencia frente al capitalismo salvaje. Desde principios del nuevo milenio, emergen varias redes nacionales para coordinar y reforzar los movimientos locales con alto contenido ecológico. Estas luchas son típicamente protagonizadas por los pobres o, cuando menos, los relativamente pobres, cuya salud, medios y calidad de vida han sido afectados por el deterioro del medio ambiente o el acaparamiento de recursos naturales.

* Docente-investigador de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la UAZ.

Durante las últimas tres décadas, bajo condiciones estructurales definidas por los principios del neoliberalismo (liberalización, desregulación, privatización) y el imperativo del capitalismo de maximizar el crecimiento económico, hemos observado una ola alarmante de destrucción y contaminación ambiental a lo largo del país. Aun los cálculos conservadores de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reconocen que la deforestación avanza a un ritmo de entre 316 mil y 800 mil hectáreas anuales, que la erosión ha afectado el 45% del territorio nacional, que casi 2,600 mil especies de plantas y animales están en peligro de extinción y que más de 100 acuíferos están sobreexplotados (Semarnat, 2005). Hay que recordar, sin embargo, que estas estadísticas tienden a subestimar la crisis ecológica, no sólo por minimizar las cifras mencionadas y omitir algunas formas de degradación ambiental, sino también porque no toman en cuenta a la población afectada. Las múltiples dependencias de Semarnat prestan poca atención a la distribución desigual de los costos de la degradación ambiental.

Es generalmente reconocido que los más perjudicados por la destrucción ambiental tienden a ser los pobres o, cuando menos, los relativamente pobres. Podemos pensar en las familias que viven en barrios expuestos a altas concentraciones de contaminación industrial o en la población indígena y campesina cuyas comunidades han sido devastadas por la minería o sumergidas por la construcción de grandes represas. Estos son los “afectados ambientales”, según se dice en las redes sociales, pero, más bien, son los “más afectados ambientales”. A final de cuentas, todos somos afectados por el deterioro ambiental en un grado u otro.

Ante esta situación, los afectados y sus aliados se han movilizado. Desde finales del siglo XX, han proliferado, en el país y en el mundo, los movimientos socioambientales orientados a proteger el medio ambiente, la salud y los medios de vida de los afectados. La lucha socioambiental se entreteje con las viejas movilizaciones de campesinos, indígenas, trabajadores, mujeres y sectores populares en general. Son manifestaciones de lo que el reconocido economista español, Joan Martínez Alier, llama “el ecologismo de los pobres”. Sus objetivos se definen en términos de las necesidades ecológicas para la vida, lo que implica resguardar los recursos naturales fuera del sistema capitalista.

En la conformación de estos movimientos, se puede observar la formación de alianzas entre organizaciones populares, ONG, universidades y otros sectores de la sociedad civil. De esta manera, los movimientos socioambientales de raíz local se articulan a redes nacionales e



internacionales para dar a conocer su lucha, facilitar el intercambio de ideas y experiencias, formular demandas colectivas y proveer apoyo mutuo y solidario.

En México, varias redes nacionales han surgido desde principios del milenio para coordinar las luchas ecologistas en el ámbito nacional: la Red en Defensa del Maíz Nativo (RDMN), que nació en enero de 2001, tres meses después del descubrimiento de maíz transgénico en Oaxaca; el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), conformado en octubre de 2004; la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), creada durante el V Encuentro del MAPDER, en junio de 2008; y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), creada en agosto de 2008, con la participación de más de 80 organizaciones locales y regionales. Estas redes se vinculan con organizaciones internacionales, tales como Vía Campesina, *International Rivers* y la Red Latinoamericana contra Represas, además de relacionarse con instituciones de investigación en diferentes países.

Algunos de los conflictos que más han llamado la atención a estas redes y a la prensa nacional son los que giran en torno de la construcción de grandes presas o la amenaza de construirlas (por ejemplo, Arcediano y El Zapotillo en Jalisco, La Parota en Guerrero, Paso de la Reina en Oaxaca, y la presa Picachos en Sinaloa); la destrucción masiva causada por compañías mineras, en su mayoría canadienses (por ejemplo, Blackfire en varias partes de Chiapas, New Gold y First Majestic Silver en San Luis Potosí y Fortuna Silver en Oaxaca); la contaminación causada por las maquiladoras en Tijuana, las Granjas Carroll (Smithfield Foods) en Veracruz y los desechos industriales y municipales que se vierten a los ríos Santiago y Atoyac, entre muchos otros. Además, ha habido protestas en contra de los planes para extender la línea 12 del metro en el Distrito Federal hasta Tláhuac el intento de edificar un aeropuerto en San Salvador Atenco, el megaproyecto de la construcción de autopistas en el estado de Puebla y la carretera Bolaños-Huejuquilla en Jalisco. Hay muchos otros casos y todos tienen una dimensión ecológica explícita en los discursos de los manifestantes.

Además, hay conflictos socioambientales que trascienden el ámbito local, entre los más importantes está la lucha por resistir la introducción de semillas genéticamente modificadas, como parte de una lucha más amplia orientada a la soberanía alimentaria. Sobre esta línea, los movimientos campesinos aglutinados alrededor de los lemas “el campo no aguanta más” y, posteriormente, “sin maíz, no hay país”, vinculados con Vía Campesina en el

ámbito internacional, han denunciado la nueva Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, aprobada a finales de 2004 y conocida en los círculos de resistencia como “la ley Monsanto” por haber abierto la puerta a la siembra de transgénicos en territorio nacional.

En una investigación reciente, Fernanda Paz (en prensa) registró 95 casos de conflictos socioambientales en 21 estados de la República. La misma investigadora reconoce que este panorama es incompleto, que hay vacíos donde existen conflictos que no han sido atendidos por parte de la prensa nacional, ni tienen representación en la ANAA. Por otra parte, su investigación pionera nos da una idea sobre la localización de sitios en resistencia, los recursos afectados o en disputa, el tipo de afectación y las causas inmediatas de la misma. A nivel nacional, 39% de los casos tiene que ver con cuestiones de agua, 25% con tierras de cultivo y territorio, y 15% con áreas protegidas. En cuanto a las causas inmediatas, más de la mitad dimanan de procesos de urbanización, industria y minería a cielo abierto.

¿Cuáles son las causas estructurales de estos problemas?
¿Cuáles son las demandas, propuestas y alternativas de los movimientos socioambientales? Y ¿qué relación tiene todo esto con la ecología política? Éstas son algunas de las preguntas que se pretenden abordar en los siguientes números.

Referencias

- Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) (2005), *El medio ambiente en México, 2005: En resumen*, México Semarnat y PNUD.
- Paz, Fernanda (en prensa), “Deterioro y resistencias. Conflictos socio ambientales en México,” en D. Tetreault, H. Ochoa y E. Hernández (coords.), *Conflictos socioambientales y alternativas de la sociedad civil*, Guadalajara ITESO.